LA CORTE CONSTITUCIONAL CONCEDIÓ EL AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACTOR AL DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA E IGUALDAD, LOS CUALES FUERON DESCONOCIDOS EN SEDE CASACIÓN POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO, AL NO HABERSE DADO APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA LABORAL

VI. EXPEDIENTE T-7023180 - SENTENCIA SU-268/19 (junio 12)

M.P. José Fernando Reyes Cuartas

Definida en el caso concreto, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra una providencia judicial, de acuerdo con los requisitos que ha establecido la jurisprudencia constitucional, la Sala Plena de la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas dentro de la acción de tutela instaurada por Alfonso Contreras Lázaro contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.

Según la solicitud de amparo, en la providencia de la Corte Suprema de Justicia se incurrió en los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del precedente judicial, al no tener en cuenta los documentos aportados en copia simple ni haber decretado de oficio las pruebas necesarias para resolver el caso iniciado por el accionante en proceso ejecutivo iniciado contra Gonzalo de Jesús Mejía Zapata, por incumplimiento de un contrato de promesa de compraventa de un inmueble.

La Corte determinó que, en efecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia debió otorgarle valor probatorio a las copias simples aportadas por el actor, las cuales no fueron tachadas o controvertidas por las partes, independientemente de que el demandado estuviese representado por curador *ad litem*, ya que esta figura está diseñada para representar los intereses del que no acude al proceso y controvertir esas pruebas no implicaba la configuración de las prohibiciones legales, referidas a aquellas que le corresponden solo a la parte, como las de disponer del derecho el litigio, es decir, que no puede conciliar, transigir, ni allanarse. En ese orden, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria perdió de vista que las normas procesales se constituyen en una herramienta y no un obstáculo para hacer efectivos los derechos de los asociados, entre ellos, el acceso a la administración de justicia y el debido proceso. Por consiguiente, al negar la casación de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá que no reconocía la legitimidad del accionante para presentar demanda ejecutiva contra el promitente vendedor, se incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto de tal envergadura, que afectó los derechos fundamentales del actor, al ser decisivo en el fondo del caso puesto a consideración de los jueces civiles, ameritando la intervención por parte del juez constitucional.

Habida cuenta que prosperaba el defecto mencionado en el párrafo anterior, por sustracción de materia, la Corte consideró que no era necesario estudiar los cargos alegados por defecto fáctico en la dimensión negativa, ni por desconocimiento del precedente invocados en la acción de tutela.

En consecuencia, la Corte procedió a revocar la sentencia del 11 de septiembre de 2018, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó el fallo del 4 de julio de 2018 de la Sala de Casación Laboral de la misma Corporación que negó el amparo invocado por Alfonso Contreras Lázaro.

En su lugar, concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la parte actora, para lo cual, dejó sin efecto la providencia del 7 de diciembre de 2017, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ordenándole a esa autoridad judicial que, en el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se pronuncie nuevamente sobre el recurso extraordinario de casación dentro del proceso No. 11001310301219980483404, teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas en este proveído.

Los Magistrados **Antonio José Lizarazo Ocampo** y **Gloria Stella Ortiz Delgado** se reservaron la posibilidad de presentar aclaraciones de voto respecto de algunas de las consideraciones contenidas en esta sentencia.